

Educación



Tarapacá abre el año escolar entre cifras cruzadas: denuncian más de 200 familias sin matrícula, mientras SLEP asegura lista de espera en cero

El inicio del año escolar en Tarapacá volvió a quedar bajo presión. Mientras el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique sostiene que, por tercer año consecutivo, logró reducir a cero la lista de espera por matrículas en establecimientos públicos de Iquique y Alto Hospicio, el movimiento "Tarapacá Se Levanta, Ningún Niño Sin Aula" denunció que más de 200 familias seguirían sin una solución concreta para escolarizar a sus hijos. La controversia no es menor: pone en el centro una de las heridas más persistentes de la región, donde el crecimiento demográfico, la presión sobre la infraestructura y la demanda concentrada en ciertos niveles siguen

tensionando el sistema educativo. De acuerdo con la información atribuida al movimiento y difundida por medios locales, Lucrecia Mena, integrante de la agrupación, afirmó que han contabilizado 220 familias en esta situación, muchas de ellas con dos o incluso tres hijos sin colegio asignado. Según su versión, el foco principal del problema estaría en Alto Hospicio, aunque también existirían casos en Iquique y Pozo Almonte. La denuncia instala una pregunta de fondo que en Tarapacá se repite casi cada año: si hay cupos disponibles en el sistema, por qué sigue habiendo familias que no logran cerrar la matrícula de sus hijos antes del inicio o durante las

La acusación del movimiento "Tarapacá Se Levanta, Ningún Niño Sin Aula" volvió a tensionar el inicio de clases en la región y dejó en evidencia una brecha que no se resuelve solo con anuncios: la diferencia entre la oferta formal de cupos y la realidad que enfrentan decenas de apoderados, sobre todo en Alto Hospicio.

primeras semanas de clases. La respuesta oficial apunta en otra dirección. El SLEP Iquique informó esta semana que logró bajar a cero la lista de espera en educación pública gracias a la apertura de 36 nuevos cursos y a la habilitación de cupos desde kínder hasta cuarto medio. Según el servicio, esa estrategia permitió responder a la demanda proyectada por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que para 2026 estima una matrícula de 24.328 estudiantes en el territorio. El director ejecutivo del SLEP Iquique, Najle Majluf Morales, sostuvo que el trabajo realizado permitió anticiparse a la demanda de matrícula y aseguró que todavía existe disponibilidad en varios niveles. En la misma línea, la subdirectora

de Apoyo Técnico Pedagógico, Ana María Bustos, indicó que aún hay cupos especialmente en primero medio, quinto y sexto básico en establecimientos de Alto Hospicio, y remarcó que el proceso de matrícula sigue en desarrollo mediante la revisión de postulaciones ingresadas a través de "Anótate en la Lista". La distancia entre ambas versiones no solo revela un conflicto de cifras. También expone una falla más profunda: la dificultad de traducir la disponibilidad teórica de vacantes en soluciones concretas para familias que requieren un colegio cercano, en un nivel específico, con jornada determinada o en comunas donde la presión por cupos sigue siendo más alta. En otras palabras,

el problema no siempre es la inexistencia absoluta de matrícula, sino la imposibilidad de acceder a una alternativa viable y pertinente para cada estudiante. El diputado Renzo Trisotti, tras reunirse con apoderados afectados, endureció esa lectura y sostuvo que la situación demuestra "una vez más la falta de planificación y anticipación del Gobierno", afirmando que, pese a los anuncios y al conocimiento previo del problema, muchas familias siguen sin saber si sus hijos podrán continuar estudiando ni en qué establecimiento podrían hacerlo. Su intervención le dio una dimensión política a un conflicto que, en Tarapacá, ya dejó de ser un episodio administrativo para transformarse en un símbolo del desfase



Educación

entre gestión pública y realidad territorial. La denuncia fue recogida por medios regionales y reapareció como una señal de inquietud en el arranque del año escolar. Sin embargo, también sería injusto omitir que la educación pública en Tarapacá ha debido enfrentar en los últimos años una presión extraordinaria sobre su capacidad de absorción, especialmente en Alto Hospicio. El propio Ministerio de Educación destacó que la región inició el año escolar 2026 con más de 87 mil estudiantes y subrayó que, entre 2022 y 2026, se abrieron 4 mil nuevas matrículas en las comunas donde más se requerían, ubicando al SLEP Iquique en el primer lugar nacional en creación de cupos.

Uno de los hitos más relevantes fue la ampliación del Colegio Simón Bolívar de Alto Hospicio, que permitió aumentar en 1.156 los cupos disponibles para 2026. Dentro de esa expansión, se cuentan 365 nuevos cupos en primero medio, uno de los niveles históricamente más demandados en la comuna. El proyecto sumó además un anexo modular de enseñanza básica con capacidad para 700 matrículas en doble jornada, con salas dotadas de aislamiento térmico y acústico, accesibilidad universal y condiciones de seguridad acordes a la normativa vigente. En términos administrativos, el esfuerzo es evidente. En términos sociales, la tranquilidad sigue lejos. Porque cuando



un sistema informa “lista de espera cero” y, al mismo tiempo, familias aseguran que aún no encuentran respuesta, lo que aparece no es solo una controversia comunicacional, sino una señal de desajuste entre la estructura del sistema y las urgencias reales de la comunidad. En Alto Hospicio, donde la demanda educacional ha crecido al ritmo de una expansión urbana acelerada, esa tensión se vive con especial crudeza. El problema de la matrícula en Tarapacá tampoco surgió este año de la nada. Ya en octubre de 2024, medios regionales informaban que cerca de 1.280 estudiantes no

habían sido asignados a ninguno de sus establecimientos de preferencia en el proceso escolar siguiente, lo que anticipaba una presión sostenida sobre la red educativa. Ese antecedente explica por qué el debate actual no puede tratarse como un hecho aislado, sino como parte de una crisis de arrastre que ha obligado al sistema a reaccionar con ampliaciones, ajustes y soluciones de contingencia. Lo que hoy está en juego no es únicamente una cifra. Detrás de cada caso denunciado hay niños que arriesgan comenzar tarde el año escolar, apoderados obligados a recorrer colegios en busca

de una vacante y familias que viven la incertidumbre como una forma de desgaste silencioso. Para una región que ha hecho de la revinculación educativa y del fortalecimiento de la matrícula pública parte de su discurso oficial, el solo hecho de que persista esta sensación de desamparo ya representa una señal de alerta. Por eso, la discusión debiera ir más allá del choque de versiones. La pregunta relevante no es quién comunica mejor, sino si el sistema está siendo capaz de responder con flexibilidad, rapidez y pertinencia territorial a una demanda que en Tarapacá tiene rasgos propios. Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte no enfrentan el problema de la misma manera, y esa diferencia exige diagnósticos más finos que una sola cifra de cobertura. En este punto, la educación pública regional se enfrenta a una prueba delicada. Por un lado, exhibe avances objetivos en creación de cupos, planificación y expansión de infraestructura. Por otro, sigue chocando con la percepción y la experiencia concreta de familias que sienten que el acceso

a la educación continúa dependiendo más de la persistencia individual que de una respuesta oportuna del Estado. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y precisamente allí radica la complejidad del momento. Tarapacá necesita que el debate sobre matrículas deje de resolverse en titulares enfrentados y pase a una etapa más transparente, donde cada familia pueda saber con claridad qué cupos existen, dónde están, en qué niveles, bajo qué condiciones y en cuánto tiempo podrá resolverse su caso. Porque el año escolar ya comenzó, y para cientos de hogares el problema no es estadístico ni político: es urgente. La región ha avanzado, sí, pero todavía no lo suficiente como para convertir la matrícula en un tema resuelto. Mientras persista esa distancia entre la capacidad declarada del sistema y la certeza que necesitan las familias, el inicio de clases seguirá cargando una sombra incómoda. En educación, como en pocas áreas, una vacante no puede ser solo un dato: tiene que convertirse, a tiempo, en un aula real.

